



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veinte (2020)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2019-00399-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: URIEL ALFEDO BOHORQUEZ SUAREZ
DEMANDADA: DISTRITO CAPITAL- ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

A través de memorial obrante a folios 182 a 184, el apoderado judicial de la parte actora, interpuso y sustentó recurso de reposición contra el auto proferido por este Despacho, en virtud del cual se inadmitió la demanda (fls.176-178).

Conforme a lo anterior, este Despacho procede a desatar el recurso interpuesto, con el objeto de determinar la concesión del mismo, de acuerdo con las siguientes,

CONSIDERACIONES

i. Del recurso de reposición

En primer lugar, frente al recurso de reposición, se observa que el art. 242 del C.P.A.C.A., establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 242. REPOSICIÓN. *Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica.*

En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.”

Visto lo anterior, es claro que el recurso de reposición solo procede contra las decisiones que no son susceptibles del recurso de apelación, tal como ocurre en el presente asunto.

Así pues, y conforme a lo definido en el inciso segundo del artículo 242 del C.P.A.C.A., es preciso manifestar que en tratándose del recurso de reposición, su trámite se rige por los arts. 318 y 319 del C.G.P., en donde se plasma lo siguiente:

“ARTÍCULO 318. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDADES. *Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez,*

contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.

El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.(...)”

“ARTÍCULO 319. TRÁMITE. El recurso de reposición se decidirá en la audiencia, previo traslado en ella a la parte contraria.

Cuando sea procedente formularlo por escrito, se resolverá previo traslado a la parte contraria por tres (3) días como lo prevé el artículo 110.”

Subraya fuera de texto

En este orden de ideas, como el recurso de reposición fue interpuesto dentro del término legal, el Despacho encuentra que el mismo es procedente y por consiguiente, es viable resolverlo.

Pues bien, el motivo de inconformidad del apoderado, con el auto que dispuso a inadmitir la demanda, radica en lo siguiente:

“(...) contrario a lo señalado por el Despacho, el acto objeto de control judicial, es precisamente el acto definitivo del procedimiento de reconocimiento y pago de pensión iniciada a través de una petición de interés particular formulada por el actor, decisión que, de conformidad con lo señalado en el artículo 87.2 de la Ley 1437 del 2011, se encuentra en firme y es pasible del control judicial formulado en el presente radicado, respecto del cual se cumplió con la convocatoria de la conciliación extrajudicial, como requisito de procedibilidad dispuesto en el artículo 161.2., ibidem.

En el presente caso, el acto administrativo en las resoluciones No. 1279 del 19 de febrero del 2019 y 2242 del 2 de marzo de 2018, dictadas por la Sra. Directora de Talento Humano-Secretario de Educación del Distrito de Bogotá D.C., por medio de las cuales se dispuso reconocimiento y pago de pensión de vejez al señor Docente URIEL ALFREDO BOHORQUEZ SUAREZ, se constituye en el ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO, con el que se culminó el procedimiento administrativo iniciado en virtud de la petición de interés particular de reconocimiento y pago de pensión elevada desde el 23 de julio de 2017, pasible de control judicial solicitado ante este Despacho, debido a que es en este acto donde la Entidad Pública, hoy demandada, realizó liquidación de la pensión de vejez de BOHORQUEZ SUAREZ, bajo porcentaje e IBL a todas luces desproporcionado y no consecuente con la realidad y o que debió reconocerse a favor del beneficiario. En consecuencia, no es procedente y mucho menos justo,

que siendo ficho actor el que reconoce y liquida la prestación, hoy se le exija al ciudadano que deba seguir en un eterno cruce desafortunado de documentos, en donde solicite a la Entidad el reajuste de su pensión, cuando ello debió suceder desde el comienzo y por esa razón el pre-pensionado agotó el procedimiento administrativo (vía gubernativa) ante la entidad, quien primeramente le negó la pensión y luego al descorrer el recurso interpuesto revoco su decisión para proceder a reconocerla y liquidarla no en los porcentajes que debía, sino como a bien tuvo desconociendo la realidad que dictaba la realidad de la hoja de vida del docente.”

Ahora bien, frente al agotamiento de requisitos de procedibilidad, el artículo 161, numeral segundo, de la Ley 1437 del 2011, consagra:

Artículo 161. Requisitos previos para demandar. *La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:*

(...)

2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto.

Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral.

(...)”

Al respecto, el H. CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCION CUARTA - Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMIREZ RAMIREZ en ponencia del catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014), sostuvo lo siguiente:

“1. Indebido agotamiento de la vía gubernativa

1.2 En términos generales, la Sala ha sostenido que ante la Jurisdicción no pueden plantearse hechos y pretensiones nuevas –diferentes a las invocadas en sede administrativa-, aunque sí mejores o nuevos argumentos y fundamentos de derecho respecto de los planteados en los recursos interpuestos en la vía gubernativa. Lo anterior, porque ello implica la violación del debido proceso de la administración. Es decir, el administrado debe necesariamente expresar en sede administrativa los motivos y fundamentos de su reclamación, lo que no obsta para que en oportunidad posterior en sede judicial, pueda exponer nuevos o mejores argumentos en aras de obtener la satisfacción de su pretensión, previamente planteada ante la administración.”

Así mismo, la Alta Corporación, en expediente 08001233100020110033501 del 22 de marzo de 2015, se manifestó:

“Como bien lo ha informado la doctrina y la jurisprudencia, la vía gubernativa constituye de nuestro ordenamiento jurídico, requisito indispensable para poder demandar ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la nulidad de un acto administrativo de carácter particular y concreto, y el respectivo restablecimiento del derecho en sus diversas modalidades bajo la acción de nulidad subjetiva consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso

Administrativo, lo anterior por cuando por regla general la Administración Pública, a diferencia de ellos particulares, no puede ser llamada a juicio contencioso si previamente no se le ha solicitado por parte del administrado una decisión sobre la pretensión que se desean ventilar ante el Juez.

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico el presupuesto de acceso a la vía judicial, también denominado doctrinariamente “decisión prealable” a decisión previa, surge a partir del momento en que el gobernado acude por escrito a elevar una pretensión de carácter subjetivo poniendo en marcha el aparato administrativo en procura de una respuesta, materializada en un acto administrativo que en muchas ocasiones basta para acceder a la vía judicial por disposición expresa del artículo 135 del C.C.A.

En ese orden de ideas, la vía gubernativa se torna en el instrumento de comunicación e interacción entre la Administración Pública, y sus Gobernados cuando media un conflicto de intereses, erigiéndose, no solo como una forzosa antesala que debe transitar quien pretende resolver judicialmente un asunto de carácter particular y concreto, sino en un mecanismo de control previo al actuar de la Administración cuyo beneficio es de doble vía, pues constituye tanto la posibilidad de obtener en vía administrativa la satisfacción de una pretensión subjetiva como la oportunidad de ejercer un control de legalidad de revisar los puntos de hecho y derecho frente a un asunto que posteriormente se ventilará dentro de un proceso judicial.

Por tanto, se entiende que el agotamiento efectivo de la vía gubernativa, no solamente lo compone la interposición de los recursos de ley sino el fiel contenido de la misma de acuerdo a la finalidad de su previsión legal, lo que implica la reclamación ante la administración de las pretensiones que posteriormente se ventilarán en sede judicial”.

Ahora bien, recuerda el Despacho, que en el caso *sub lite*, se pretende la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones No. 2242 del 2 de marzo del 2018, “por la cual se niega la solicitud”, y No. 1279 del 2019, “por el cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la resolución No. 2242 del 02/03/2018 y se reconoce una pensión de vejez”. **Actos administrativos encaminados a pronunciarse y resolver, únicamente, la solicitud de reconocimiento pensional de la demandante**, más no, como interpreta la parte activa, a pronunciarse frente a la reliquidación de la prestación, puesto que, solo fue hasta el precitado acto administrativo demandado, que se reconoció la prestación, siendo imposible jurídicamente que se pronunciara respecto de una reliquidación de pensión que no había sido reconocida.

No sobra agregar que la jurisprudencia ha indicado que los actos administrativos de reconocimiento y el de reliquidación de una pensión, son autónomos entre sí y no conforman una unidad jurídica, lo que implica la imposibilidad de acudir a la jurisdicción solicitando el enjuiciamiento del segundo, solicitando la nulidad de primero.

Por lo anteriormente expuesto, este Despacho, se mantiene en la posición de la necesidad de requerir la petición de reajuste ante la entidad, en la que en sede administrativa, por la elemental y potísima razón, que se recuerda al apoderado,

que en el evento que la administración satisfaga directamente los pedimentos de los ciudadanos, la jurisdicción no entrará en ningún momento a conocer de eventuales controversias.

Así las cosas, una vez haya solicitado la reliquidación de la pensión de vejez, con el objeto de provocar un pronunciamiento de la administración para que esta, mediante un acto administrativo, fijara su posición en relación con el derecho cuyo otorgamiento se le pide, y en el evento que esta sea denegada, es cuando puede solicitarse mediante la respectiva demanda.

En virtud de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO.- NEGAR el recurso de reposición interpuesto contra el auto que inadmitió la demanda, de conformidad con los señalamientos esbozados en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO.- Dese cumplimiento a lo establecido en la parte resolutive del auto del que dispuso inadmitir la demanda presentada por el actor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

Firmado Por:



**ANDRES JOSE QUINTERO GNECCO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-
CUNDINAMARCA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
**7ccb953857fec4a0149ed66f7496815dbca3b77923903b058c85baf88ddb
bcc5**

Documento generado en 21/07/2020 09:05:49 a.m.